

¿Cabe hablar aún de la dignidad de la política?

ANTONIO GARCÍA SANTESMASES*

Res publica, 24 de febrero de 2011.

El ponente comienza asegurando que el título, que le fue propuesto, generó en él cierta perplejidad: sugiere enfoques muy diversos. Ha optado por analizar cómo se usa en el contexto de la actual política española el término *dignidad*, pretendiendo con ello ofrecer un análisis de la realidad actual y de los retos que plantea.

Desde un punto de vista teórico, el concepto parece normativamente bien perfilado. *Dignidad* en el ámbito político significa, al menos, respeto a la ley y a los procedimientos democráticos, evitando el abuso y la desviación de poder; la política no debe ejercerse en beneficio propio, ni tampoco en beneficio de grupos particulares. La infracción de esta regla genera responsabilidades políticas o incluso penales, aunque son evidentes los problemas de conexión entre ambas, que llegan hasta plantear la posibilidad de que la condena penal no tenga repercusiones sobre el ejercicio de cargos orgánicos en el correspondiente partido político. La conducta privada del ciudadano quizá pueda ser irrelevante para la acción política, o bien puede inhabilitar para ella en función de diversas circunstancias; mas parece claro

* Antonio García Santesmases es Catedrático de Filosofía política en la UNED; pero resulta más conocido por su trayectoria pública como militante socialista, comprometido dentro del PSOE con la corriente crítica *Izquierda Socialista*, en la que comienza de la mano de Luis Gómez Llorente; luego pasa a ser su portavoz y es diputado en el Congreso durante una legislatura. Su obra, después de una tesis doctoral sobre “Marxismo y Estado”, se ha orientado preferentemente hacia el estudio de la tradición del pensamiento político español, de la ética política (*Ética, política y utopía*, Madrid 2001) y del laicismo (*Laicismo, agnosticismo, fundamentalismo*, Madrid 2007). Este resumen de su intervención y del debate posterior es responsabilidad de Ignacio Gutiérrez, que desde un principio asume la imposibilidad de reproducir la elocuencia y vivacidad del discurso oral.

que la condena penal derivada de la acción pública ha de provocar algún tipo de responsabilidad política.

De otra parte, la conmemoración del trigésimo aniversario del 23-F trae a la memoria qué es lo que convierte a un personaje público en merecedor del adjetivo *digno*. Es evidente que, por su actitud en el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez, el General Gutiérrez Mellado y el Secretario General del Partido Comunista Santiago Carrillo se ganaron el calificativo. Mas, pasando a un análisis más general, la pregunta sería: ¿qué le pedimos al político: fidelidad a los principios o capacidad para adaptarse con pragmatismo a las necesidades de su tiempo; rigor o una cierta cintura para plegarse de manera utilitaria a los intereses coyunturales? El elogio de Adolfo Suárez no deja de ser un elogio de la traición, pues había prometido fidelidad al franquismo; el juicio puede aplicarse también a Juan Carlos I, para oponerlo por ejemplo a su padre. La dignidad no es, pues, un valor inequívoco: quien abandona viejas convicciones para adaptarse a un nuevo contexto no necesariamente pierde con ello su dignidad, el principio de convicción no resulta insoluble de ella.

Pero la noción de dignidad ha adquirido un sentido nuevo en las últimas legislaturas. Quizá desde Azaña, si excluimos los furiosos ataques que sufrió Adolfo Suárez por parte de la ultraderecha española en los tiempos de transición, pocos presidentes han sufrido una campaña tan feroz en su contra como José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el principio ha sido considerado indigno de presidir el Gobierno de la Nación.

Todo empezó el 11 marzo 2004. Para el Partido Popular, los peores momentos habían pasado. Las manifestaciones de 2003 contra la guerra de Irak no le habían llevado a la derrota en elecciones municipales y autonómicas del mismo año, e incluso los acontecimientos de la Asamblea de Madrid deslegitimaron al Partido Socialista y en las nuevas elecciones autonómicas del mes de noviembre el Partido Popular logra la mayoría. Los resultados electorales de Cataluña conducen a un gobierno tripartito que permite una campaña adicional de deslegitimación del Partido Socialista al presentarlo como un rehén de Carod Rovira, identificado simplistamente con ETA. Ante

las elecciones de 2004, el PP se considera seguro ganador, algo que influye en la elección como candidato de Mariano Rajoy. Con ocasión de los atentados del 11 marzo, la tesis de ETA cierra el círculo: algunos llegan incluso a insultar al PSOE por sus vínculos con la banda supuestamente organizadora en la matanza. Pero el gobierno del Partido Popular gestiona de manera tan catastrófica la información de la que dispone que centra en ETA toda la atención y olvida la responsabilidad de los islamistas incluso cuando ésta se confirma. En un clima de tremenda tensión, la polarización lleva al gobierno a Rodríguez Zapatero

Esa misma noche se comienza a plantear algo que nunca había ocurrido en democracia: se considera que el triunfo electoral del PSOE es ilegítimo, que las elecciones están radicalmente falseadas. Por primera vez, un grupo mediático impone la estrategia política al partido de la oposición, al denunciar una conspiración general en la que estaría implicado el aparato del Estado. Es una consigna repetida mil veces de la que no hay manera de escapar. La crispación máxima se proyecta sobre los cuatro años siguientes, pese a una situación económica francamente favorable. La ilegitimidad radical del Gobierno presidido por quien es considerado “Presidente por accidente” (son palabras de Ansón), que ha utilizado ilegítimamente un atentado terrorista brutal y que sería rehén de sus promotores, quiebra toda posibilidad de convivencia serena y polariza todo el mundo político.

En ese contexto se abre una serie de debates que contribuyen a polarizar la situación: la situación de Cataluña, el imaginario de la Historia de España, el concepto de nación; en el fondo está la propia transición, que se convierte en tema central de valoración política. Son cuestiones nuevas con respecto a un panorama asentado desde los años 80, en el que se aceptaba la transición y sus resultados fundamentales. Pero lo cierto es que, a estas alturas, resultaba difícil evitar tales cuestiones.

Si el 23 febrero de 1981 estaba claro que, Adolfo Suarez *-el héroe traidor-* había organizado mal el partido sobre el que se asentaba y que no sabía cómo articularlo, que era un mal parlamentario y que UCD se autodestruía, más de doscientos diputados del Partido Socialista en 1982 habían estabilizado la

política, logrado la integración de España en Europa, controlado el poder militar, racionalizado en alguna medida el sistema autonómico con la célebre LOAPA, y todo ello sin tocar la labor de la transición. Es cierto que Felipe González tiene dificultades con la economía, y políticamente está sometido a presión por la izquierda de su propio partido; pero nada de ello afecta a la gobernabilidad del partido y del país. Rodríguez Zapatero, sin embargo, con una mayoría exigua, tiene problemas de gobernabilidad desde el primer día, problemas con los nacionalistas catalanes que se encuentran desbancados del poder en Cataluña y problemas en el ámbito nacional al gobernar con el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Los nuevos temas de la agenda política, exigidos más por los programas de los socios de gobierno que por la voluntad explícita del propio Partido Socialista, son: el concepto de nación y la autonomía de Cataluña; los derechos cívicos y la laicidad; y, en fin, la memoria histórica.

Por lo demás, debe destacarse que Felipe González contó con el apoyo incondicional de un importante grupo periodístico (el Grupo Prisa) capaz de reducir a la marginalidad a cualquiera que pareciera en condiciones de disputarle la izquierda, dentro de su propio partido desde Luis Gómez Llorente a José Borrell, pasando por Fernando Morán o Nicolás Redondo. Rodríguez Zapatero, sin embargo, llega al poder sin un aparato mediático que sustente sus posiciones, algo que constituirá un fuerte impedimento para afrontar políticamente una agenda política tan cargada de problemas.

En el debate sobre la nación se enfrentan dos tesis básicas. La primera es la de la “España sin complejos”, que defiende los quinientos años del Estado-Nación. La segunda corresponde a los independentistas catalanes y vascos, con Carod Rovira como socio del gobierno nacional y con el Plan Ibarretxe planteado desde el Gobierno vasco. Proponer en tal contexto una nueva articulación territorial exigía un apoyo mediático que la hiciera asumible en el conjunto del Estado, pero ya sabemos que el Gobierno carecía de tal respaldo. Su propuesta se centraba en la posibilidad de diferenciar entre los distintos nacionalistas, de separar las pretensiones de ETA de las posibilidades de Cataluña. Frente a ello surge una nueva campaña de catalanofobia, simbolizada en la guerra contra el cava, y que paradójicamente utiliza los

tópicos vascos como contramodelo: la bravura de los vascos acompaña a la sinceridad de sus propósitos. En todo este debate influye de manera decisiva el paso del tiempo en democracia. Pensemos, por ejemplo, en la posición de Fernando Savater, en la época del debate constituyente, y su posición actual. Hay que recordar, en efecto, los años en que proliferaban los asesinatos de policías y militares, cuando las propias víctimas se sienten culpables y carecen de apoyo; cuando los asesinatos llegan a la clase política, también ésta se encuentra con la soledad; esto sólo se rompe con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el movimiento Basta Ya y el pacto entre Partido Socialista y Partido Popular. La recuperada dignidad de las víctimas de ETA, ha de ser compatible, sin embargo, con las pretensiones de la izquierda catalana, porque enfrentarse a la voluntad democrática del Parlamento de Cataluña con el argumento de la existencia de ETA supone equiparar a todos los nacionalismos y, en el terreno inmediato de la práctica política, dejar sin mayoría al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no sólo la negociación con ETA, sino también el reconocimiento de símbolos patrióticos a los catalanes genera una crispación que se articula en forma de odio al presidente Rodríguez Zapatero. Porque la política no es sólo gobierno de la economía, también hay emociones que llegan a fracturar la convivencia.

Ahora domina, pues, la memoria de las víctimas y su dignidad. Pero de nuevo es una dignidad ambivalente, porque a las víctimas de ETA, que ciertamente no pueden ser olvidadas, se oponen las víctimas del golpe de estado de 1936, cuya memoria sin embargo se cuestiona. El constituyente había echado el pasado al olvido, pero no todos puedan olvidar en igual medida. Tras el modelo de la transición, otras posteriores (en Chile o Argentina, en Sudáfrica o en los países del Este de Europa) ofrecen posibilidades alternativas: la memoria significa al menos dar sepultura a los que están enterrados en las cunetas. Es preciso interpretar de nuevo la historia, volver a leer la tradición de la Restauración y de la República, procesar una vez más la guerra civil. Sólo cabe enfrentarse a la construcción de identidad nacional a través de memoria. Mas, en este contexto, la ley de memoria histórica opera con un elemento adicional para suscitar odio contra Rodríguez Zapatero, al que se le niega la posibilidad de comparar su carácter de víctima, como nieto de un asesinado en la guerra, con el sufrimiento de las víctimas de ETA. Se llega a

gritar: “Zapatero, vete con tu abuelo”. Ese odio afecta algo tan profundo que difícilmente puede volverse atrás.

Todo ello responde a un concepto diferente de progreso histórico, pero también a una diferente concepción de la dignidad, que va más allá de lo elemental: ya no se contrapone simplemente a la corrupción. En los estratos más profundos, el concepto de dignidad tiene un contenido ideológico. Y existen ahí tres variantes que se oponen al gobierno de Rodríguez Zapatero. De un lado, para los neoconservadores, con el actual Papa a la cabeza, el mercado no es nada más que un vacío espiritual; son los portavoces de la antiilustración, que oponen la subjetividad moderna a los valores eternos e invocan los límites de la democracia en forma de recta razón y de objetividad. La dignidad va asociada a la naturaleza, se define de manera confesional; digno es quien defiende la fe y se opone al matrimonio homosexual, al aborto, a la asignatura de educación para la ciudadanía. En segundo lugar, hay quien piensa que la transición clausuró el pasado, sin que la memoria pueda resurgir alentada por el cine o la literatura; la historia es tarea sólo de historiadores. El tercer elemento de dignidad corresponde al principio neoliberal: la dignidad se encarna en la primacía de la vida privada frente a lo público, en los empresarios (que ahora se llaman emprendedores) frente a los trabajadores, en el capital frente a los sindicatos. Esta última tesis avanza presentándose como mal menor o única salida frente a la crisis; mas lo cierto es que la derecha española no ha ganado nunca hablando sólo de las ventajas del mercado, necesita también la nación y la Iglesia, los demás valores sobre los que se asienta esa noción de dignidad.

En resumen, tal determinación de la dignidad desde el punto de vista ideológico se resume en las ideas de Iglesia, nación y mercado. Es evidente que tales supuestos generan problemas que existen realmente, no son una invención de Rodríguez Zapatero, como se llega a decir. Enfrentarse a ellos da lugar a una crispación desconocida hasta este momento en la vida pública española. Porque la izquierda, en efecto, propone en primer lugar un proyecto laicista. Que no significa anticlericalismo, ni necesariamente ateísmo, y que tampoco implica privatizar todo sentimiento religioso, porque también la religión puede tener presencia pública. Pero tal presencia pública no puede

implicar la pretensión de imponer su concepción desde el poder público a partir de una supuesta verdad moral indiscutible. La laicidad ha de tener en cuenta la tradición, pero exige también, por ejemplo, negociar nuevos acuerdos con Santa Sede. Por lo que se refiere a la nación, la izquierda tampoco puede cerrar ahora fácilmente el capítulo que abrió el gobierno catalán de Maragall. Es un problema que afecta primero al socialismo catalán, pero que impone también la necesidad de formular un nuevo concepto de nación, proponiendo el federalismo frente al centralismo y al independentismo.

En cuanto al Estado social, con Europa como elemento de contradicción, hay recordar que en España se discutió mucho sobre la entrada en la OTAN y sobre la posibilidad de una salida, pero poco sobre la integración en la Unión Europea. En Francia, socio fundador, se debate sobre Europa desde el principio, con especial virulencia desde Maastricht, después con el llamado Tratado constitucional. Europa se encuentra con oposiciones de izquierda tanto en Francia como en Alemania, mientras que en España la integración europea sería apreciada siempre como una salvación: era Europa la que se enfrentaba a la guerra de Irak cuando el presidente Aznar se reunía con Bush en las Azores. Pero, entretanto, la integración se ha convertido en un problema, porque se ha mercantilizado todo el proyecto, convertido en un objeto de especulación entregado al poder económico, amenazando con condicionar la democracia de los Estados. Europa aparece ahora, de modo novedoso, como problema. La crisis actual supone la naturalización del espanto: se presentan como inevitables la reforma de las pensiones, el retraso de la jubilación, los recortes en la sanidad. Los interrogantes no son sólo laborales o económicos, no afectan sólo al principio social: en el modelo de China, donde no hay Estado social, tampoco existen la democracia o el Estado de Derecho. La conciencia de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es un factor de resignación, la lucha de izquierda se convierte en una lucha contra implacables molinos de viento, dominados por una furia destructiva capaz de romper todos los marcos de convivencia. La pérdida de derechos significa una fractura entre los que están instalados en el sistema y tienen recursos al menos para vender sus posiciones, que pierden progresivamente, y los que ya están fuera, en la economía sumergida, en el

paro de larga duración, en los márgenes de la legislación de extranjería. La vida política corre así el riesgo de quedar dominada por la xenofobia y el populismo.

En tal contexto, llevar adelante el ambicioso proyecto en el que el PSOE se siente obligado a participar por exigencia de sus socios de gobierno hubiera hecho necesario construir un *nuevo relato* que identificara un *nuevo proyecto* para izquierda, alzar una concepción alternativa de la dignidad de la actividad política. Pero lo cierto es que tampoco ha existido un entramado de medios de comunicación dispuesto a colaborar en la empresa.

En el debate ulterior se plantearon expectativas y dudas. De un lado, ante los problemas realmente existentes, cabe decir desde la izquierda que “todos queríamos más” de Rodríguez Zapatero, que se ha mantenido dentro de unos límites quizá “demasiado” razonables: en la apuesta por la laicidad sin llegar a revisar los acuerdos con la Santa Sede, en la reforma del Estado autonómico sin llegar al Estado federal, especialmente en el gobierno de la economía. Lo cierto, sin embargo, es que ni siquiera en el seno del partido socialista estaban todos dispuestos a ir tan allá como ha intentado avanzar Rodríguez Zapatero: ni en el reconocimiento del matrimonio homosexual, ni en el proyecto federal, ni en la memoria histórica. Por eso, quizá al Presidente se le pueda reprochar sobre todo cierta ingenuidad, que llega casi a la frivolidad con lo que se llamado “el buenismo”. Cuando por ejemplo se afirma que la pretensión de que ampliar derechos de los homosexuales no perjudica a nadie, se pone de manifiesto que no se ha comprendido la complejidad de la vida social; cuando se trivializa el concepto de nación, se prescinde de la complejidad de la construcción de identidad individual y colectiva. El nuevo imaginario de la izquierda ha de ser consciente de la profundidad de las quiebras que genera y de la potencia de los resortes que activa, y por tanto debe poner en juego instrumentos de similar envergadura.